

TERCERO. El Gobernador de la Provincia de Panamá queda encargado de hacer cumplir la presente Resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 213

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 213.—Panamá, 10. de Diciembre de 1925.

Damián Palacios, de nacionalidad colombiana, fué apresado el 18 de Noviembre último por sindicársele de hurto de menor cuantía y puesto a disposición del Corregidor de San Felipe y Chorrillo, quien celebró el mismo día el juicio correccional a que la falta expresada daba lugar, encontrado culpable a Palacios, pero en vista de que este sujeto ha sido detenido ya treinta y dos veces por la Policía por acusársele de otros tantos delitos o faltas, lo consideró extranjero no deseable al tenor de los artículos 1o. y 2o. de la Ley 76 de 1924, y lo colocó, con la información de rigor, a órdenes del Gobernador de la Provincia de Panamá, para los fines del Decreto Ejecutivo número 131 del año en curso dictado por el órgano de este Despacho, para el objeto indicado en la parte final del artículo 2o. de la Ley arriba nombrada. Sometido el caso a la consideración del Consejo de Gabinete, resolvió esta entidad la expulsión del mentado Palacios del territorio nacional.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Expulsar del territorio nacional, a Damián Palacios. El Gobernador de la Provincia de Panamá queda encargado de cumplir y hacer cumplir la presente Resolución.

Se ordena a las autoridades marítimas de los puertos y de las fronteras terrestres de la República, que por ningún motivo permitan el acceso de Palacios al país una vez llevado a cabo su expulsión. La misma orden se imparte a las mismas autoridades respecto de todos los individuos que en lo futuro se expulsen, o que hayan sido expulsados ya, del territorio nacional.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 55

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número.—Panamá. 20 de Marzo de 1926.

En información sumaria remitida a este Despacho por el Gobernador de la Provincia de Panamá consta que Efraín Kutchuk y Max Gordón son extranjeros sin profesión honesta ni hacienda o renta, que viven sin saberse los medios lícitos de donde provenga su subsistencia y tienen notorias malas costumbres.

Por lo expuesto y de conformidad con los ordinales 1o. y 2o. del artículo 1o. de la Ley 76 de 1924, precisa tener como vagos a estos sujetos. El artículo 2o. de la misma Ley 76 manda que a los extranjeros sindicados o convictos de esa falta se les considere como elemento no deseable y se les deporte del país.

Por otra parte, se advierte que según informes suministrados a este Despacho por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Gordón ha habido que anularle la carta de naturaleza que había adquirido por haberse demostrado que son falsas las pruebas aducidas para demostrar los derechos de este hombre a optar la nacionalidad panameña.

Sometido el caso a la consideración del Consejo de Gabinete, esta entidad decidió la expulsión de los dos individuos de que se trata.

Por tanto,

SE RESUELVE:

Expulsar del territorio nacional a Efraín Kuchuk y a Max Gordón como extranjeros no deseables.

El Gobernador de la Provincia de Panamá queda encargado de cumplir la presente Resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 104

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 104.—Panamá, 19 de Mayo de 1925.

El artículo 12 de la Ley 64 del presente año, dice así:

“También serán deportados los extranjeros que durante su permanencia en el país se hagan responsables de beodez habitual, proxenetismo, violencia carnal, seducción, corrupción de menores, ultrajes al pudor, litos contra la patria o los poderes de la Nación, usurpación de títulos y funciones públicas, amenazas, heridas o maltratamiento de obra a empleados público con mando y jurisdicción, incendiarismo, robo, extorsión,

reincidencia de hurto o tentativa de alguno de estos delitos. La orden de deportación podrá dictarse antes o después del juzgamiento del delincuente o luego que el mismo haya cumplido su pena, según lo estime conveniente el Poder Ejecutivo."

Y en vista de que los reos Narciso Durán y José Jacinto Valencia, colombianos, fueron condenados a sufrir penas por delitos que se hallan comprendidos en el artículo citado, previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

**SE RESUELVE:**

Deportar del territorio de la República a los reos arriba expresados y comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para el cumplimiento de esta resolución.

Comuníquese y publíquese.

**R. CHIARI.**

El Secretario de Gobierno y Justicia,

**CARLOS L. LÓPEZ.**

---

**RESOLUCION NUMERO 188**

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 188.—Panamá, 18 de Septiembre de 1925.

El artículo 12 de la Ley 64 del presente año, dice así:

"También serán deportados los extranjeros que durante su permanencia en el país se hagan responsables de beodez habitual, proxenetismo, violencia carnal, seducción, corrupción de menores, ultrajes al pudor, delitos contra la patria o los poderes de la Nación, usurpación de títulos y funciones públicas, amenazas heridas o maltratamiento de obra a empleados público con mando y jurisdicción, incendiarismo, robo extorsión, reincidencia de hurto o tentativa de alguno de estos delitos. La orden de deportación podrá dictarse antes o después del juzgamiento del delincuente o luego que el mismo haya cumplido su pena, según lo estime conveniente el Poder Ejecutivo."

Y en vista de que los reos Facundo Riera, venezolano, y Horacio C. Lozano y Manuel Palladeras, colombianos, fueron condenados a sufrir sus respectivas penas, por delitos que se hallan comprendidos en el artículo citado, previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

**SE RESUELVE:**

Deportar del territorio de la República a los reos arriba mencionados y comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para el cumplimiento de esta resolución.

Comuníquese y publíquese.

**R. CHIARI.**

El Secretario de Gobierno y Justicia,

**CARLOS L. LÓPEZ.**

RESOLUCION NUMERO 198

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 198.—Panamá, 3 de Octubre de 1925.

El artículo 12 de la Ley 64 del presente año, dice así:

“También serán deportados los extranjeros que durante su permanencia en el país se hagan responsables de beodez habitual, proxenetismo, violencia carnal, seducción, corrupción de menores, ultrajes al pudor, delitos contra la patria o los Poderes de la Nación, usurpación de títulos y funciones públicas, amenazas heridas o maltratamiento de obra a empleados público con mando y jurisdicción, incendiarismo, robo extorsión, reincidencia de hurto o tentativa de alguno de estos delitos. La orden de deportación podrá dictarse antes o después del juzgamiento del delincuente o luego que el mismo haya cumplido su pena, según lo estime conveniente el Poder Ejecutivo.”

Y en vista de que el reo Leoncio Crisón, colombiano, fue condenado a sufrir pena por delito que se halla comprendido en el artículo citado, previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

SE RESUELVE:

Deportar del territorio de la República a los reos arriba mencionados y comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para el cumplimiento de esta resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 216

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 216.—Panamá, 30 de Octubre de 1925

El Poder Ejecutivo, en Resolución número 83-bis, de la Sección Segunda, fechada el 17 Abril del corriente año, reconoció la existencia jurídica de la asociación denominada SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES, establecida en esta capital, en la inteligencia de que se trataba de una asociación de interés privado sin objetos lucrativos para fines lícitos de la vida, pero es el caso que se ha establecido de modo concluyente que tal asociación, o parte considerable de sus miembros o afiliados, persigue principalmente la propagación y aplicación de ideas encaminadas a cambiar por medios violentos las instituciones políticas y sociales existentes, hechos que las leyes prohíben y castigan. Por otra parte, se observa que de acuerdo con el artículo

20 de la Constitución, en la República únicamente hay derecho a asociarse para fines lícitos y no siéndolo los del SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES, según queda expresado,

SE RESUELVE:

Revocar, como en efecto se revoca, la Resolución número 83-bis, de 17 de Abril del corriente año, expedida por el órgano de esta Secretaría, por la cual se le reconoció personería jurídica a la asociación arriba nombrada.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 255

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 255.—Panamá, 18 de Diciembre de 1925.

El artículo 12 de la Ley 64 del presente año, dice así:

“También serán deportados los extranjeros que durante su permanencia en el país se hagan responsables de beodez habitual, proxenetismo, violencia carnal, seducción, corrupción de menores, ultrajes al pudor, delitos contra la patria o los Poderes de la Nación, usurpación de títulos y funciones públicas, amenazas, heridas o maltratamiento de obra empleados público con mando y jurisdicción, incendiarismo, robo, extorsión, reincidencia de hurto o tentativa de alguno de estos delitos. La orden de deportación podrá dictarse antes o después del juzgamiento del delincuente o luego que el mismo haya cumplido su pena, según lo estime conveniente el Poder Ejecutivo.”

Y el artículo 2o. de la Ley 76 de 1924, dice:

“Los vagos, cuando sean panameños, serán castigados con las penas que establece el artículo 1284 del Código Administrativo; pero si son extranjeros se les considerará como elemento no desable y serán deportados.”

Y como los reos José M. Salazar E., Froilán Rengifo, Florentino Bonilla y Antonio Guerrero fueron condenados a sufrir penas por delitos que se hallan comprendidos en el artículo 12 de la Ley 64 primeramente citado, y Salomé Kruman, Fany Kruman, Judas Lenemann y Sofía Lenemann, caen bajo la sanción del artículo 2o. de la Ley 76 también mencionado, previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

SE RESUELVE:

Deportar del territorio de la República a los reos arriba mencionados y

comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para el cumplimiento de esta resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 252

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Segunda.—Resolución número 252.—Panamá, 15 de Diciembre de 1926.

El artículo 12 de la Ley 64 del presente año, dice así:

También serán deportados los extranjeros que durante su permanencia en el país se hagan responsables de beodez habitual, proxenetismo, violencia carnal, seducción, corrupción de menores, ultrajes al pudor, delitos contra la patria o los Poderes de la Nación, usurpación de títulos y funciones públicas, amenazas, heridas o maltratamiento de obra a empleados público con mando y jurisdicción, incendiarismo, robo, extorsión, reincidencia de hurto o tentativa de alguno de estos delitos. La orden de deportación podrá dictarse antes o después del juzgamiento del delincuente o luego que el mismo haya cumplido su pena, según lo estime conveniente el Poder Ejecutivo."

Y en vista que el reo Pedro Emilio Mercado, colombiano, fue condenado a sufrir pena por delito que se halla comprendido en el artículo citado, previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

Deportar del territorio de la República a los reos arriba mencionados y comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para el cumplimiento de esta resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

Documentos  
Relacionados con la  
Nueva Edición de los  
Códigos Civil y Judicial





## RESOLUCION NUMERO 158

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 158.—Panamá, 5 de Septiembre de 1925.

Visto el memorial dirigido a este Despacho por don Miguel A. Grimaldo B. y que a la letra dice:

“En la Ley 52 del año en curso, sobre reformas judiciales, publicada en la “Gaceta Oficial” y en el folleto, también oficial, que contiene las leyes expedidas en los dos últimos años, hay un error sustancial en el primer inciso del artículo que sustituye al 116 del Código Judicial, que dice: “Artículo 116—El Juez Superior conocerá con intervención del Jurado, de los siguientes delitos intentados, frustrados y consumados: traición a la patria, homicidio, aborto, falsificación de moneda, robo, extorsión, secuestro y hurto cuando exceda de mil balboas, difamación e injurias causadas en la prensa, incendio, inundación, sumersión y otros delitos que implican un delito común y de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte o de comunicación.” Consiste el error en que según este inciso, todos los delitos comunes son de competencia del Juez Superior, lo que no es ni ha sido nunca la voluntad de los legisladores. Se trata simplemente de un error de copia como puede verificarse fácilmente. La Comisión Revisora de los Códigos Nacionales que fué quien redactó originariamente la ley sobre reformas judiciales, propuso la reforma del artículo 116 del Código Judicial así: ‘El Juez Superior conocerá en primera instancia de los siguientes delitos intentados, frustrados o consumados; traición a la Patria, homicidio, aborto, falsificación de moneda, robo, extorsión, secuestro y hurto cuando exceda de mil balboas, incendio, inundación, sumersión y otros delitos que implican un PELIGRO común, y de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte o de comunicación.’ En la sección correspondiente al 20 de Marzo del año en curso el H. D. Conte B. modificó el artículo anterior así: “el Juez Superior conocerá, con intervención de Jurado, de los siguientes delitos intentados, frustrados o consumados: traición a la patria: . . . . .”

La modificación del Diputado Conte B. consistía únicamente en cambiar las palabras “en primera instancia” por estas otras “con intervención del Jurado”, en lo demás el artículo no sufrió ninguna modificación, sin embargo el escribiente al copiar el resto del artículo le cambió la palabra PELIGRO por DELITO, lo que puede dar lugar a discusiones sobre la competencia en el conocimiento de algunos delitos comunes. Como se trata de un simple error que puede ser constatado en los Archivos de la Asamblea Nacional, pido a usted se sirva verificar los datos anteriores y si fuere el caso, ordenar la corrección del artículo 116 del Código Judicial, a fin de que quede en la forma en que fué concebido y aprobado por la Asamblea Nacional. Panamá, 31 de Agosto de 1925.”

En consideración a que este Despacho ha comprobado, con estudio de los documentos que reposan en la Secretaría de la Asamblea, la exactitud de los hechos expuestos por el señor Grimaldo B., además de que la lógica más trivial está indicando que no puede tratarse, donde el artículo 116 de la Ley 52 del año en curso, dice “y otros delitos que implican un delito común,” de todos los delitos comunes, puesto que ésto pugnaría abiertamente con disposiciones posteriores de la misma ley, desvirtuaría por completo el sentido del mismo mandato en que aparecen las palabras preinsertas y vendría a atribuir a un solo Juez el conocimiento de la casi totalidad de los delitos, pues la mayor parte de éstos pertenecen a los llamados comunes, lo que es absurdo, de modo que desde todo punto de vista resulta evidente que el legislador quiso decir: “PELIGRO COMUN.”

Visto, además, el artículo 601 del Código Administrativo que dice:

“Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán y deben ser rectificadas por los respectivos funcionarios cuando no quede duda de la voluntad del legislador.”

Y considerando que se trata simplemente de un yerro caligráfico, por lo que es aplicable al caso, por analogía, la disposición transcrita,

SE RESUELVE:

La forma en que debe aparecer el artículo 116 de la Ley 52 de 1925, por ser la correcta y auténtica, es la siguiente:

“El Juez Superior conocerá, con intervención del Jurado, de los siguientes delitos intentados, frustrados o consumados: traición a la patria, homicidio, aborto, falsificación de moneda, robo, extorsión, secuestro y hurto cuando exceda de mil balboas, difamación e injurias causadas en la prensa, incendio, inundación, sumersión y otros delitos que implican un PELIGRO común y de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte o de comunicación.”

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 161

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 161.—Panamá, 7 de Septiembre de 1925.

Don Miguel A. Grimaldo B. celebró con el Gobierno el día 31 de Agosto último, un contrato para arreglar y ordenar una nueva edición de los Códigos Civil y Judicial. Este trabajo, una vez terminado, debía ser aprobado por el Poder Ejecutivo, quien para el efecto solicitaría previamente la opinión del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, como el señor

Grimaldo Bernal ha presentado ya a este Despacho el Código Judicial arreglado y ordenado, se remitió la obra al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fin convenido, y ese alto funcionario, en oficio número 75 del 4 del mes en curso, dice lo siguiente:

“En el mes de Julio de este año el señor Miguel A. Grimaldo B. tuvo a bien solicitar mi concepto respecto del trabajo llevado a cabo por él de nuestro Código Judicial concordado y anotado; y en ese entonces dije al señor Grimaldo, después de detenido estudio de su obra, lo siguiente: Estimado amigo: He examinado con toda atención el trabajo del Código Judicial que Ud. ha llevado a cabo, agrupando en un solo cuerpo las disposiciones vigentes y las leyes adicionales y reformatorias de ellas. El mérito de su labor no consiste—a mi juicio—únicamente en el orden metódico de las disposiciones relacionadas con cada materia, sino en las anotaciones, citas y referencias que ilustran y hacen expedito el estudio y fácil consulta de todo lo que constituye las tres secciones o partes de que se compone nuestro Código Judicial, a saber: organización judicial, procedimiento civil y procedimiento penal. Su libro, pues, será utilísimo; vendrá a llenar una necesidad urgente. Y por tanto, es indudable el éxito que Ud. alcanzará si lo da a la publicidad, como es de desearse. Con mis sinceros parabienes para Ud. y con mis congratulaciones para el país, quedo de Ud. amigo y atento S. (fdo.) Manuel A. Herrera L.” En respuesta a la comunicación número 1211 a, de 2 de los corrientes, me es grato confirmar a Ud. el anterior concepto. Soy de Ud. Atto S. (fdo.) Manuel A. Herrera L.—Presidente de la Corte Suprema.”

Como este Despacho ha estudiado detenidamente, a su vez, el trabajo del Contratista señor Grimaldo Bernal, y lo ha encontrado completo y correcto,

SE RESUELVE:

.... Aprobar, como se aprueba, y devolverlo al Contratista para que le dé cumplimiento al punto 3o. de la Cláusula Primera del Contrato número 30 de 31 de Agosto del corriente año, a que se ha hecho referencia.

Comuníquese y publíquese.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

R. CHIARI.

CARLOS L. LÓPEZ.

---

RESOLUCION NUMERO 2

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 2.—Panamá, 4 de Enero de 1926.

Visto el trabajo para la nueva edición del Código Civil hecho por don Miguel Angel Grimaldo B. en cumplimiento del contrato número 30 de 1925, celebrado por el Gobierno por el órgano de esta Secretaría y oída al respecto la opinión del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en concepto del cual se trata de una obra completa y de indiscutible utilidad.

SE RESUELVE:

Aprobar en todas sus partes, por encontrarse ajustado a las estipulaciones del contrato citado.

Comuníquese y publíquese.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

R. CHIARI.

CARLOS L. LÓPEZ.